

El precio del gas presiona al Ejecutivo para renovar el escudo anticrisis

BELÉN CARREÑO
Madrid

El final del verano metereológico y el enquistamiento del conflicto en Irán ponen contra las cuerdas a las instituciones europeas a la hora de afrontar la subida de los precios. El invierno llega con las reservas de gas en mínimos para esta época del año en Europa, y el precio del gas repuntando al alza por encima de los 70 euros por megavatio hora (MWh). Aunque las subidas están lejos de los ré-

cord de 2022, cuando hubo problemas reales de abastecimiento, la inflación subirá en un contexto de agotamiento de la ciudadanía. En este marco, Sumar ya ha pedido a sus socios de Gobierno, que están al frente de las carteras económicas, que adopten medidas extraordinarias similares a las de 2022: rebajas del IVA en facturas y alimentos; un tope al precio del gas en el mercado mayorista y un impuesto a las petroleras.

El Gobierno, a través del vicepresidente de Economía Car-

los Cuerpo, ha pedido reabrir el debate sobre el impuesto de las empresas energéticas pero a nivel europeo, tras un intenso *lobby* por parte de las firmas españolas, que amenazaron con frenar las inversiones e hicieron descarrilar el impuesto nacional en 2024. Para evitar esta amenaza, y sortear la oposición de partidos como Junts o PNV, el Ejecutivo y otros cinco países europeos piden que se implante a nivel comunitario, como se hizo temporalmente en 2022.

Fuentes de Sumar aseguran que “las medidas de apoyo no pueden traducirse en una transferencia de recursos públicos hacia los márgenes de las petroleras”. En el primer semestre del año, Repsol vio crecer un 265% sus beneficios y aumentó la retribución en forma de dividendo al accionista. Las empresas petroleras con negocio fuera del golfo Pérsi-

co registran resultados al alza similares. El otro sector beneficiado de estas crisis inflacionistas, la banca, sí ha visto cómo su impuesto extraordinario se consolida y estará vigente hasta 2027.

La posibilidad de recuperar un mecanismo similar a la denominada excepción ibérica parece ahora muy alejada. Cuando Bruselas permitió que España y Portugal sentaran topes al precio del gas que se usa para generar electricidad, lo hizo en un contexto de hasta 300 euros por MWh, lejos de los importes actuales. Aunque momentos puntuales de las noches de este verano, cuando se retira la producción solar, han estado marcando picos a esos niveles.

La previsión de muchos analistas es que la competición global por hacerse con el suministro de gas que no pasa por Ormuz sea la puerta de entrada para que la

economía sufra uno de los temidos efectos de segunda vuelta. Esto es, cuando la subida de precios se filtra a otros bienes y servicios.

Fuentes del Ejecutivo señalan la intención de esperar a las cifras detalladas de inflación de agosto, que se conocerán a mediados de mes, para ver si ya hay datos que confirmen una correa de transmisión de los precios de los hidrocarburos a la electricidad. El Ejecutivo puso en marcha un paquete de medidas en primavera para afrontar el primer choque del ataque de Estados Unidos a Irán. Se rebajaron varios impuestos energéticos y se bonificó el combustible con éxito, ya que la inflación se contuvo. Pero ante la previsión de una desescalada, tras una supuesta tregua acordada con alfileres por Washington y Teherán, aprobó en junio la retirada paulatina de ayudas durante el verano.